Distr.
GENERAL

CAT/C/17/Add.1
23 de julio de 1992

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITE CONTRA LA TORTURA

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
CON ARREGLO AL ARTICULO 19 DE LA CONVENCION

Primeros informes suplementarios que deben presentarse en 1992

Adición

NORUEGA*

[25 de junio de 1992]

INTRODUCCION

1. Se hace referencia al informe inicial presentado por Noruega CAT/C/5/Add.3 de 19 de octubre de 1988, en adelante denominado "el informe inicial"). Se hace referencia asimismo a la parte inicial de carácter general de los informes de Noruega, el llamado "documento de base" (HRI/CORE/1/Add.6). La parte I del informe inicial contiene información general, entre otras cosas sobre los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por Noruega. Además de los instrumentos mencionados en dicho informe, debe añadirse que Noruega ratificó la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes el 21 de abril de 1989. El 5 de septiembre de 1991, Noruega ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte.

---

* Para el informe inicial de Noruega, véase el documento CAT/C/5/Add.3; para su examen por el Comité véanse los documentos CAT/C/SR.12 y 13 y Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo cuarto período de sesiones, Suplemento N° 46 (A/44/46), párrs. 76 a 93.

2. En lo que respecta a la situación de los instrumentos de derechos humanos en el derecho interno (párrafo 6 del informe inicial), se hace referencia a los párrafos 8 a 13 del tercer informe periódico presentado por Noruega con arreglo al artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/70/2 de 28 de enero de 1992).

I. INFORMACION SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS Y LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS
RELATIVOS A LA APLICACION DE LA CONVENCION

Artículo 2

3. Debe añadirse la información que figura a continuación a la ofrecida en los párrafos 8 y 12 del informe inicial de Noruega sobre los órganos especiales de investigación encargados de los casos contra los funcionarios de policía y los fiscales por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

4. El párrafo 5 del artículo 67 de la Ley N° 925 de 22 de mayo de 1981 relativa al procedimiento penal (en adelante denominada "Ley de procedimiento penal", véase el anexo I) entró en vigor el 18 de diciembre de 1987. Conforme a esta disposición, se han establecido en cada uno de los distritos fiscales órganos investigadores especiales que son independientes de la policía y del ministerio fiscal. Durante el período de 1988-1990, se denunció a esos órganos un total de 1.236 casos. En 103 de ellos, de los cuales 98 eran faltas de tránsito, los órganos investigadores tuvieron motivos para creer que se había cometido un delito. Veinte de los casos se referían al uso de la fuerza por la policía. Todavía no se dispone de las estadísticas relativas a 1991. Según las estimaciones preliminares, el número de casos denunciados a los órganos investigadores aumentó en 1991 en comparación con años anteriores.

Artículo 3

5. La información presentada en el informe inicial de Noruega sigue siendo válida. Además, cabe mencionar que la Ley N° 64 de 24 de junio de 1988 sobre la entrada de extranjeros en el Reino de Noruega y su presencia en el Reino (en adelante denominada "Ley de inmigración") entró en vigor el 1° de enero de 1991.

6. Con referencia a la pregunta hecha por el Presidente del Comité contra la Tortura (CAT/C/SR.12, párr. 27) y a la respuesta que se le dio entonces (CAT/C/SR.13, párr. 23) puede añadirse lo siguiente: además del artículo 15 de la Ley de inmigración, que trata de las obligaciones internacionales de Noruega en materia de no devolución, existe también una disposición general contenida en el artículo 4 de la Ley de inmigración que dice lo siguiente:

"Relación de la ley con las normas internacionales"

La ley se aplicará de conformidad con las normas internacionales que obligan a Noruega cuando éstas tengan por objeto reforzar la posición del extranjero."

Véase también el párrafo 25 infra, que se refiere a los casos en que no puede efectuarse la extradición.

Artículo 4

7. La información proporcionada en el informe inicial de Noruega sigue siendo válida. Además de las disposiciones fundamentales por las que se prohíben diversas formas de violencia a las que se hace referencia en el informe inicial (arts. 222, 223, 228 y 229 del Código Penal General de 22 de mayo de 1902, en adelante denominado el "Código Penal"), las disposiciones que figuran a continuación son también pertinentes en este contexto: el artículo 231 estipula que la pena máxima por un delito de lesiones voluntarias es de 15 años de prisión. Si las lesiones fueron voluntarias y han tenido por resultado la muerte, la pena máxima será de 21 años. En el artículo 232 se estipula que las lesiones voluntarias infligidas de manera particularmente dolorosa serán sancionadas con una pena máxima de 21 años de prisión.

8. El Storting aprobó el 16 de junio de 1989 una nueva disposición del artículo 232 que entró en vigor el 20 de julio de 1989. Dicho artículo dice ahora lo siguiente (se subraya la parte nueva del texto):

"Si un delito mencionado en los artículos 228 a 231 se comete voluntariamente de manera especialmente dolorosa o por medio de un veneno u otras sustancias que sean peligrosas para la salud, o de un cuchillo u otro instrumento especialmente peligroso, o en condiciones especialmente agravantes, se impondrá siempre una pena de prisión, y por un delito previsto en el artículo 231 impondrá en todos los casos una pena de prisión no mayor de 21 años y esta pena podrá aumentarse hasta en 3 años. La pena prescrita en el primer párrafo del artículo 228 podrá, sin embargo, aumentarse en sólo 6 meses de prisión y al mismo tiempo podrán imponerse multas. Al decidir si existen otras circunstancias especialmente agravantes, se deberá prestar especial atención a si el delito se cometió contra una persona indefensa, si tuvo motivos raciales, si no fue provocado, si fue cometido conjuntamente por varias personas, y si constituye malos tratos."

9. Entre las demás disposiciones de la legislación noruega relativas a la violencia o al hostigamiento de parte de personas que desempeñen funciones oficiales, cabe mencionar las siguientes.

Código Penal Militar de 22 de mayo

10. El artículo 108 del Código Penal Militar contiene una disposición especial relativa a la violación de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. El texto dice lo siguiente:

"Todo el que viole, o sea cómplice en dicha violación, las disposiciones relativas a la protección de las personas o bienes establecidas en

- a) los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, sobre el trato de los prisioneros de guerra, y sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra,

- b) los dos Protocolos Adicionales a estos Convenios de 10 de junio de 1977,

será sancionado con prisión no mayor de cuatro años, a menos que el delito sea sancionado con una pena más severa."

Ley N° 7 sobre los niños y los padres, de 8 de abril de 1981

11. Esta ley contiene, en el tercer párrafo de su artículo 30, una prohibición de carácter general contra toda forma de violencia contra los niños. La prohibición comprende los actos de violencia perpetrados por los maestros (y los padres) y cualesquiera otras personas en el desempeño de funciones oficiales. No se tienen en cuenta los motivos de dichos actos de violencia.

Ley N° 24 sobre las escuelas primarias, de 13 de junio de 1969

12. El último párrafo del artículo 16 de esta ley dice lo siguiente:
"No podrán utilizarse los castigos corporales y otros tratos degradantes".

Reglamento sobre el acceso limitado al uso de medidas de coerción y prohibición de los castigos corporales en la atención médica psiquiátrica, la atención médica de los retardados mentales y la atención médica de los epilépticos

13. El artículo 1 de este reglamento, aprobado por Decreto Real el 3 de junio de 1977, dice lo siguiente:

"El paciente/cliente será tratado con el debido respeto de su dignidad e integridad personales. Esto se aplica también cuando una persona, en relación con los cuidados prestados al paciente/cliente, debe sujetarlo o contenerlo a fin de impedir un daño personal o un daño material considerable. Los castigos corporales no están permitidos."

En el reglamento se especifican los medios de coerción que pueden emplearse cuando sean absolutamente necesarios para evitar que el paciente cause un daño a sí mismo o a otras personas. Esos medios son el aislamiento, que no durará más de dos horas si el paciente no está vigilado, y los medios mecánicos. No podrán emplearse otros medios (art. 3). Los medios de coerción sólo podrán usarse cuando hayan sido prescritos por un médico (art. 6), y la institución llevará un registro del uso de dichos medios (art. 8). La Junta de Inspección se asegura mediante visitas periódicas que se cumpla el Reglamento y presenta informes escritos después de cada visita.

Nivel de los castigos

14. Con referencia a los artículos antes mencionados del Código Penal (arts. 228 a 232) y a las respuestas que figuran en el documento CAT/C/SR.13 (párrs. 12 y 13), cabe notar que existe una amplia gama de penas de prisión y de otros castigos por delitos violentos. La jurisprudencia determina si un delito violento será sancionado en la gama inferior o superior de las diversas posibilidades que ofrece la ley. Puesto que no existe en Noruega jurisprudencia en relación con actos de violencia que puedan clasificarse como

torturas desde los juicios que se llevaron a cabo después de la segunda guerra mundial, no se dispone de estadísticas recientes que indiquen el nivel de los castigos aplicados en dichos casos.

Ministerio fiscal

15. Con referencia al informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3 párr. 9) y a una pregunta formulada (CAT/C/SR.12, párr. 25) cabe señalar lo siguiente: la norma principal del Código Penal (art. 77) es que todos los delitos están sujetos a acusación pública sin condiciones, a menos que la ley establezca excepciones. Todos los actos de violencia previstos en los artículos 229 a 233 están sujetos a acusación pública sin condiciones.

16. Los delitos previstos en el artículo 228 están sujetos, en general, a acusación pública sin condiciones, pero existen algunas excepciones. El artículo 228 se enmendó en 1988 y ahora dice lo siguiente (se subraya la parte nueva del texto):

"Toda persona que cometa actos de violencia contra otra persona o de otra manera la lesione corporalmente, o se haga cómplice de esos actos, será castigada por agresión con multas o prisión de hasta seis meses.

Si la agresión tuvo por consecuencia alguna lesión en el cuerpo o daño a la salud o dolor considerable, se podrá imponer la prisión de hasta tres años, y hasta cinco años si las consecuencias fueron la muerte o lesión grave.

Si una agresión es vengada con otra agresión o provocada por una agresión o delito anterior contra el honor, se podrá omitir el castigo.

No se iniciará proceso, salvo a solicitud de la víctima, a menos que:

- a) el delito haya tenido como consecuencia la muerte, o
- b) el delito se haya cometido contra la esposa o compañera anterior o actual del agraviador, o
- c) el delito se haya cometido contra un hijo del agraviador o un hijo de la esposa o compañera del agraviador, o
- d) el delito se haya cometido contra un pariente en ascendencia directa, o
- e) se requiera el proceso por razones de interés público."

Si un delito violento clasificado en el artículo 228 puede considerarse también como acto de tortura, se considerará que se requiere el proceso por razones de interés público con arreglo al inciso e) y, al mismo tiempo, el delito será sancionado con arreglo al artículo 115 del Código Penal, relativo a los funcionarios públicos que emplean medios ilegales para obtener concesiones o declaraciones de un acusado.

Artículo 5

17. En el párrafo 22 del informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3) se hace referencia al artículo 12 del Código Penal, que rige la aplicación territorial del derecho penal noruego. En este artículo se aplica en gran medida el principio de la universalidad. El derecho penal noruego no sólo es aplicable a los actos de tortura cometidos en el Reino, sino también a dichos actos cometidos en el extranjero por cualquier nacional noruego o por cualquier persona domiciliada en Noruega.

18. El derecho penal noruego también es aplicable, en ciertas condiciones establecidas en el párrafo 4 del artículo 12, a los actos cometidos en el extranjero por un extranjero. El artículo 12 del Código Penal dice lo siguiente:

"A menos que se especifique otra cosa o que se acepte otra cosa en un acuerdo concertado con un Estado extranjero, el derecho penal noruego será aplicable a los actos cometidos:

1. en el Reino, inclusive:
  - a) en cualquier instalación o construcción situada en la parte noruega de la plataforma continental y utilizada para la exploración, la explotación o el almacenamiento de recursos submarinos naturales,
  - b) en construcciones para el transporte de recursos de petróleo en relación con cualquier instalación o construcción situada en la parte noruega de la plataforma continental,
  - c) en la zona de seguridad alrededor de dichas instalaciones o construcciones como se dice en los incisos a) y b) supra,
  - d) en cualquier buque noruego (inclusive una plataforma de perforación noruega o una instalación móvil semejante) en alta mar, y
  - e) en cualquier avión noruego fuera de las zonas que estén sujetas a la jurisdicción de cualquier Estado;
2. en cualquier buque o avión noruego, dondequiera se encuentre, por un miembro de su tripulación o cualquier otra persona que viaje en el buque o avión; por el término buque se entiende también en este caso una plataforma de perforación u otra instalación móvil semejante;
3. en el extranjero por cualquier nacional noruego o por cualquier persona domiciliada en Noruega cuando el acto
  - a) sea uno de los previstos en los capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 ó 36 del presente Código o en los artículos 135, 141, 142, 144, 169, 192 a 195, 199, 206 a 209, 222 a 225, 227 a 235, 238, 239, 242 a 245, 291, 292, 294 apartado 2, 318, 326 a 328, 330, último párrafo, 338, 367 a 370, 380, 381 ó 423 y en cualquier caso cuando

- b) se trate de un delito o una falta contra el Estado de Noruega o una autoridad pública noruega o,
  - c) sea también sancionable conforme a la ley del país en que se ha cometido;
4. en el extranjero, por un extranjero cuando el acto sea
- a) uno de los previstos en los artículos 83, 88, 89, 90, 91, 91 a, 93, 94, 98 a 104, 110 a 132, 148, 149, 150, 151 a, 152 primer y segundo párrafos, 152 a, 153 primer a cuarto párrafo, 154, 159, 160, 161, 169, 174, 178, 182 a 185, 187, 189, 190, 192 a 195, 217, 220, 221, 222 a 225, 227 a 229, 231 a 235, 238, 239, 243, 244, 256, 258, 266 a 269, 271, 276, 291, 292, 324, 325, 328, 415 ó 423 del presente Código o artículos 1, 2, 3 ó 5 de la Ley sobre los secretos de defensa, o
  - b) sea un delito sancionado también conforme a la ley del país en que se ha cometido, y el agraviador sea residente en el Reino o se encuentre en él.

En los casos en que la criminalidad de un acto dependa de algún efecto real o pretendido, o esté influido por él, el acto será considerado como que se ha cometido cuando ha ocurrido dicho efecto o se ha tenido intenciones de producirlo."

Artículo 6

19. Por lo que respecta a los delitos que corresponden a la jurisdicción de los tribunales noruegos (véanse los párrs. 17 y 18 *supra*), se aplican las normas de la Ley de procedimiento penal. Esto significa, entre otras cosas, que un tribunal puede detener a un sospechoso o tomar cualquier otra medida para asegurar su presencia siempre que se hayan cumplido las condiciones normales que se aplican a dichas medidas.

20. Noruega es parte en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El artículo 36 de la Convención requiere que un Estado que mantenga detenido a un nacional de otro Estado deberá informar, si la persona detenida así lo desea, a la oficina consular del Estado que envía sin demora alguna acerca de la detención de la persona y permitir las visitas de los funcionarios consulares y la comunicación con los mismos. Se ha informado a las autoridades noruegas pertinentes de las obligaciones que les corresponden con arreglo al artículo 36 y éstas se han incorporado en sus directrices de trabajo.

Artículo 7

21. El Código Penal y la Ley de procedimiento penal contienen disposiciones en el sentido de que las autoridades noruegas adoptarán medidas para someter a juicio los delitos comprendidos en la jurisdicción de los tribunales noruegos. Se hace referencia, entre otras cosas, al artículo 12 del Código Penal (párr. 19) y a la parte V de la Ley de procedimiento penal (anexo 1).

Artículo 8

22. Por lo que se refiere al párrafo 1 de ese artículo, se hace referencia a lo mencionado en el párrafo 24 del informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3). Además de por la Ley de extradición de 13 de junio de 1975, la extradición está regulada por la Ley de 3 de marzo de 1961 relativa a la extradición a Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia (la Ley de extradición entre los países nórdicos) y por el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957, que Noruega ratificó el 19 de enero de 1960. Asimismo, Noruega ha concertado acuerdos bilaterales de extradición con varios Estados. Sin embargo, la extradición también puede llevarse a cabo a países con los que Noruega no ha concertado un acuerdo de ese tipo.

23. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de extradición, que regulan los casos en que no puede llevarse a cabo la extradición, dicen lo siguiente:

"Artículo 5

No podrá llevarse a cabo la extradición por un delito político. Si la cuestión de que se trata entrañase un delito de carácter no político, se podrá llevar a cabo la extradición por ese delito si se considera que la cuestión es predominantemente de carácter no político.

Artículo 6

No podrá llevarse a cabo la extradición si se presume que la persona de que se trata corre el riesgo de sufrir una persecución dirigida contra su vida o su libertad, u otra persecución de carácter grave, debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas u otras circunstancias políticas.

Artículo 7

No podrá llevarse a cabo la extradición si ésta es contraria a consideraciones humanitarias fundamentales, especialmente debido a la edad, el estado de salud u otras circunstancias personales de la persona de que se trata.

Artículo 8

1. No podrá llevarse a cabo la extradición cuando se haya dictado un fallo, se haya impuesto una multa o una confiscación sustitutorias o se haya notificado que no se seguirá un procedimiento judicial en el Reino respecto del acto de que se trata.

2. Si se sobresee el procedimiento judicial contra la persona acusada debido a falta de pruebas, la extradición sólo podrá llevarse a cabo si se cumplen las condiciones estipuladas en los párrafos 1 y 6 del artículo 74 de la Ley de procedimiento penal.

3. Si en un fallo definitivo de un Estado extranjero que no sea el que ha solicitado la extradición se determinó la existencia de responsabilidad penal respecto del delito de que se trata, y si dicho

Estado es signatario del Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957, la Convención europea sobre la validez internacional de los fallos judiciales penales de 28 de mayo de 1970 o la Convención europea sobre la transmisión de procedimientos penales de 15 de mayo de 1972, la extradición podrá rechazarse en los casos en que:

- a) el acusado sea declarado inocente;
- b) el acusado sea declarado culpable pero no se imponga una pena;
- c) la pena impuesta haya sido cumplida en su totalidad; o
- d) la pena impuesta haya quedado sin efecto en virtud de la legislación del país en que se impuso.

No obstante, la prohibición de la extradición estipulada en el presente párrafo no se aplicará cuando el acto de que se trata se cometió total o parcialmente en el territorio del Estado que la solicita o en un lugar equivalente a éste, o si el acto estaba dirigido contra una persona, una institución u otra entidad pública del Estado solicitante, o si quien cometió el acto era funcionario público de dicho Estado.

Artículo 9

No se podrá llevar a cabo la extradición si el derecho al procesamiento o a la aplicación de la pena ha prescrito en virtud de la legislación noruega."

Artículo 9

24. El artículo 24 de la Ley de extradición regula la asistencia mutua en cuestiones penales. Dicho artículo dice lo siguiente:

"1. A los efectos del procesamiento penal en un Estado extranjero, en el momento de la solicitud podrá decidirse que las medidas coercitivas estipuladas en los capítulos 15 y 16 de la Ley de procedimiento penal se aplicarán de igual modo que en los casos relativos a delitos de carácter análogo que son objeto de procesamiento en el Reino.

2. La solicitud se presentará al Ministerio, a menos que en un acuerdo concertado con un Estado extranjero no se disponga otra cosa. La solicitud deberá contener información relativa al carácter y el momento y el lugar de comisión del acto criminal. Sólo se concederá si se demuestra que se ha emitido un fallo relativo al uso de medidas coercitivas conforme a la legislación del Estado de que se trata.

3. La solicitud no se concederá si el acto a que se refiere el proceso, o un acto análogo, no es punible conforme a la legislación noruega, o si, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 a 6, no se puede justificar la extradición. En caso de que la solicitud provenga de Dinamarca, Finlandia, Islandia o Suecia, en lugar de las condiciones estipuladas en la primera oración, se exigirá que la extradición por ese acto no pueda justificar la extradición conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de 3 de marzo de 1961.

4. El Ministerio podrá rechazar inmediatamente la solicitud si no cumple las condiciones establecidas en el segundo párrafo, o si es por completo evidente que no será concedida. Si la solicitud no se rechaza conforme a lo establecido en la presente disposición, el caso se transferirá a la autoridad encargada de instruir el proceso. Cuando el tribunal decida la cuestión de si existe un derecho legítimo a utilizar medidas coercitivas, también decidirá la cuestión de si se cumplen las condiciones estipuladas en el presente artículo. En consecuencia, se aplicarán las disposiciones del tercer párrafo del artículo 17 y del primer párrafo del artículo 18. En lo que concierne al acuerdo a que se hace referencia en la primera oración del segundo párrafo, podrá decidirse, no obstante, que la cuestión sea resuelta por una autoridad diferente del Ministerio.

5. Si existe probabilidad de que una persona que se encuentra en Noruega y contra la que no se ha formulado acusación alguna tenga derecho a un objeto que haya sido secuestrado, la entrega de dicho objeto a las autoridades del otro país se efectuará a condición de que sea devuelto sin gastos una vez concluido el proceso."

25. Noruega es Parte en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 20 de abril de 1959. Sin embargo, se puede proporcionar en general asistencia a un Estado extranjero independientemente de si se ha concertado o no con él un acuerdo de asistencia mutua.

Artículo 10

26. Se hace referencia a una pregunta formulada por un miembro del Comité (CAT/C/SR.12, párr. 15) y a la respuesta correspondiente (CAT/C/SR.13, párr. 22).

27. En la Academia de Policía se enseñan a los estudiantes cuestiones relacionadas con los derechos humanos, sobre la base, entre otras cosas, del Código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de 17 de diciembre de 1979. En lo que se refiere a la enseñanza y la práctica de los métodos de interrogación de la policía, conviene consultar los párrafos 30 y 31 infra.

28. La Escuela de Funcionarios de Prisiones imparte enseñanza sobre derechos humanos y torturas en el marco de diversas disciplinas como psicología, criminología y ética. También se enseña a los funcionarios de prisiones el Reglamento de Prisiones Europeo (aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de febrero de 1987).

29. En las instituciones de enseñanza de sanidad y medicina básica de Noruega no se proporciona una formación sistemática al personal de atención de la salud para el reconocimiento y tratamiento de las víctimas de la tortura. En los cursos de psiquiatría se proporcionan a los estudiantes de medicina algunas enseñanzas sobre los efectos de la tortura. Sin embargo, el personal de atención de la salud que trabaja con los refugiados tiene oportunidad de recibir mayor formación en esa disciplina y de especializarse en ella. La institución más importante a ese respecto es el Centro Psicosocial de Oslo. El Centro Psicosocial tiene a su cargo varios equipos psicosociales que

trabajan en diferentes partes del país. Esos equipos ofrecen a todo el personal de atención de la salud interesado servicios de asesoramiento e información general en relación con los refugiados y con los posibles efectos de la tortura. El Centro Psicosocial se estableció en 1990 como parte de la Universidad de Oslo y se ocupa de la enseñanza, los servicios de asesoramiento e investigación y el tratamiento clínico de los refugiados que tienen problemas psicológicos debido a las torturas sufridas.

Artículo 11

30. Además de la información proporcionada en el informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3, párrs. 27 y 28), conviene tener en cuenta lo siguiente: en las instrucciones para incoar procesos (establecidas mediante Real Decreto de 28 de junio de 1985) hay normas concretas sobre cómo debe llevar a cabo la policía los interrogatorios y los exámenes. En el anexo 3 se incluyen los artículos 8-2 (Interrogatorio de los sospechosos), 8-4 (Derecho de los abogados a estar presentes durante el interrogatorio), 8-6 (Interrogatorio de los testigos) y 10-4 (Restricciones al derecho de examen).

31. Todas las normas y prácticas relativas al régimen de detención de las personas, inclusive el interrogatorio y el examen, están sujetas a la supervisión constante de las autoridades competentes. Los órganos especiales de investigación a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4 supra examinan las denuncias de hostigamientos o violencias físicas o mentales durante la detención.

Artículo 12

32. En el párrafo 29 del informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3) se indica, entre otras cosas, que la investigación de las denuncias de tortura se ajusta en Noruega a los procedimientos ordinarios de las causas penales, salvo las demandas contra funcionarios de policía y funcionarios del ministerio fiscal por delitos cometidos durante el desempeño de sus funciones. En los párrafos 3 y 4 supra se proporciona información adicional sobre las normas aplicables en esas investigaciones.

33. El artículo 77 del Código Penal estipula que "los actos delictivos serán objeto de procesamiento público, a no ser que se disponga otra cosa. También se hace referencia a los párrafos 15 y 16 supra."

34. En el capítulo 18 de la Ley de procedimiento penal se incluyen disposiciones relativas a la investigación de los delitos. Con arreglo al artículo 224, se llevará cabo una investigación penal cuando, como resultado de un informe o de otras circunstancias, existan motivos razonables para investigar la existencia de un acto delictivo respecto del cual las autoridades públicas deben iniciar un proceso. En el tercer párrafo del artículo 226 se dice que "si una persona concreta resulta sospechosa, la investigación estará encaminada a determinar las pruebas contra ella y las pruebas a favor de ella". De conformidad con el cuarto párrafo del artículo 226, la investigación "se llevará a cabo con la máxima rapidez posible y de modo que nadie sea innecesariamente objeto de sospechas o de molestias".

Artículo 13

35. Se hace referencia a los párrafos 7 a 16 supra.

36. Con referencia al informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3, párr. 32) y a una respuesta que se ha proporcionado al respecto (CAT/C/SR.13, párr. 21) viene a observar que sigue en examen la cuestión de reformar la Ley de prisiones de 12 de diciembre de 1958 (que ya ha sido enmendada en varias ocasiones).

37. Las normas que rigen el trato dado a los presos figuran en la Ley de prisiones y en los reglamentos correspondientes. Los presos tendrán acceso al Reglamento Central de Prisiones, emitido por la Junta Central de Prisiones. El reglamento interno de cada prisión, del que deberá haber un ejemplar en cada celda, contiene información sobre cómo obtener el Reglamento de Prisiones. El Ministerio de Justicia ha decidido que se efectúe una traducción al inglés del Reglamento de Prisiones. En todas las prisiones hay disponibles ejemplares del Reglamento de Prisiones Europeo (véase el párr. 28 supra). En los centros de mayor importancia, ese Reglamento está disponible en varios idiomas europeos. La administración de la prisión tiene el deber de poner ese Reglamento en conocimiento de los presos.

38. La Junta Central de Prisiones, que depende del Ministerio de Justicia, controla y supervisa las condiciones a las prisiones noruegas. Los presos pueden formular quejas a la Junta, directamente o por conducto de los canales administrativos. Además, se pueden formular quejas ante el ombudsman para la administración pública del Parlamento, así como ante los organismos internacionales. Los tribunales podrán, a instancia de parte, conocer de la legalidad de las decisiones relativas a las condiciones de encarcelamiento. Además, los comités para las prisiones visitan éstas sin ser anunciados a fin de observar las condiciones en las prisiones y hablar con los presos. Esos comités están dirigidos por un juez, a fin de asegurar su objetividad.

Artículo 14

39. La víctima de un acto de violencia puede reclamar una indemnización financiera al autor del hecho de conformidad con la Ley de reparación de daños y perjuicios de 13 de junio de 1969 (Nº 26) (véase también el artículo 3 de la Ley de procedimiento penal). En el Real Decreto de 23 de enero de 1981 se establece un plan de indemnizaciones del Estado por daños personales causados por actos delictivos. En el anexo 4 figura el reglamento establecido por dicho Decreto, en su forma enmendada por el Real Decreto de 6 de diciembre de 1985. Según este reglamento, el Estado proporciona indemnización por los daños personales causados por un acto doloso de violencia o por otros actos delictivos perpetrados con fuerza o violencia. El reglamento se aplica a los casos en que los daños han sido causados en territorio noruego, independientemente de la nacionalidad de la víctima o del atacante. En 1990, el Estado pagó un total de 17,4 millones de coronas noruegas como indemnización, en aplicación de ese reglamento. En 1991 el total de indemnizaciones pagadas fue de 25 millones de coronas noruegas aproximadamente. A ese respecto, también hay que mencionar que el 22 de junio de 1992 Noruega ratificó la Convención Europea sobre la Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos.

Artículo 15

40. Se hace referencia al informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3, párr. 34), así como a las preguntas formuladas (CAT/C/SR.12, párr. 10) y a las respuestas proporcionadas (CAT/C/SR.13, párr. 16).

41. Aunque la Ley de procedimiento penal no contiene ninguna norma de determinación de la prueba, constituye un principio básico del derecho procesal noruego que los testigos y las partes formularán sus declaraciones directamente ante los tribunales. Las declaraciones hechas durante las investigaciones preliminares sólo pueden ser citadas durante el juicio en condiciones muy limitadas. Si existen indicios razonables que permitan creer que la declaración se hizo bajo amenazas o torturas, el juez puede decidir declararla inválida como prueba: en primer lugar porque existen motivos suficientes para dudar de la exactitud e incluso de la veracidad de dicha declaración, y en segundo lugar porque si los jueces condenaran a alguien sobre la base de una violación de las normas establecidas para proteger los intereses de los acusados, ello constituiría un descrédito para el sistema judicial.

42. La práctica jurídica y la legislación proporcionan orientaciones generales relativas al uso de pruebas obtenidas ilegalmente. Los tribunales examinarán si la ilegalidad cometida para obtener la prueba es de carácter grave y también si el delito cometido es de carácter grave. Asimismo, los tribunales deben examinar en qué medida son merecedores de protección los intereses perjudicados y si las pruebas obtenidas ilegalmente son favorables o contrarias al acusado. Si el tribunal ha permitido el uso de pruebas obtenidas ilegalmente o si posteriormente se descubre que las pruebas utilizadas en el juicio se obtuvieron ilegamente, ello puede utilizarse como fundamento de una apelación respecto de ese proceso. En la práctica los problemas mencionados se presentan con poca frecuencia, probablemente debido a que la policía y las autoridades que instruyen los procesos normalmente no utilizan pruebas obtenidas ilegalmente.

Artículo 16

43. Se hace referencia a los párrafos 35 y 36 del informe inicial de Noruega (CAT/C/5/Add.3) y a las observaciones formuladas anteriormente en relación con el artículo 4 (párrs. 7 a 16).

II. INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA POR EL COMITE

44. Se ha considerado que, en general, era más adecuado incluir la información solicitada por el Comité durante su examen del informe inicial de Noruega siguiendo los artículos pertinentes de la Convención en la parte I del presente informe.

45. Además, se deben mencionar las investigaciones sobre supuestas brutalidades graves cometidas por la policía en la ciudad de Bergen a que se hace referencia en el párrafo 30 del informe inicial de Noruega y en el párrafo 19 del documento CAT/C/SR.13, de 25 de abril de 1989. Esas investigaciones fueron realizadas por un fiscal y un grupo de investigadores

policiales de Oslo. No se encontró prueba alguna de graves actos de brutalidad cometidos por la policía. Únicamente en uno de los 368 casos de presuntos malos tratos policiales que se han investigado se encontraron pruebas suficientes para formular cargos contra un funcionario de policía por la comisión del delito. Como resultado de esas investigaciones, se formularon cargos contra 15 personas por hacer acusaciones falsas contra la policía, y 11 de esas personas han sido condenadas. Las investigaciones de las supuestas violencias graves cometidas por la policía en Bergen y el hecho de que las autoridades que instruyeron los sumarios decidieran formular los cargos mencionados anteriormente han sido fuente de considerables debates y críticas, en particular entre los miembros de las profesiones jurídicas. Amnistía Internacional, en una carta que dirigió al Gobierno de Noruega, también manifestó su preocupación de que los cargos por haber formulado acusaciones falsas contra la policía pueden hacer que las personas que desean presentar denuncias por malos tratos recibidos de la policía se abstengan de presentarlas. Las autoridades noruegas han tomado nota debidamente de las opiniones de Amnistía Internacional sobre esta cuestión.

Lista de anexos*

1. Anexo 1: Ley N° 25 de 22 de mayo de 1981 relativa al procedimiento penal (Ley de procedimiento penal).
2. Anexo 2: Ley N° 64 de 24 de junio de 1988 sobre la entrada de extranjeros en el Reino de Noruega y su presencia en el Reino (Ley de inmigración)
3. Anexo 3: Instrucciones para incoar procesos adoptadas mediante Real Decreto de 28 de junio de 1985, artículos 8-2, 8-4, 8-6 y 10-4.
4. Anexo 4: Reglamento del 23 de enero de 1981 sobre indemnizaciones del Estado por daños personales causados por actos delictivos, enmendado el 6 de diciembre de 1985.

---

* Estos documentos, presentados en inglés por el Gobierno de Noruega, pueden consultarse en los archivos del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.